



OSAL

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Informe de Coyuntura

A

M

**Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales**



CLACSO

**Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais**

Documento de trabajo N° 48

*Realizada por
el Comité de Seguimiento
del Conflicto Social y la Coyuntura
Latinoamericana de A*



Coordinación

María Celia Cotarelo

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina (OSAL)** constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinado a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de reseñas bibliográficas cuatrimestrales en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado constituye uno de los resultados de este trabajo de registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un registro de la producción bibliográfica realizada durante el período indicado en uno de los 19 países relevados.

La Reseña Bibliográfica presentada ha sido elaborada por alguno de los diversos **Comités de Seguimiento del Conflicto Social** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación de un equipo de investigación que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento del Conflicto y la Coyuntura Latinoamericana

PAIS	INSTITUCION	RESPONSABLES
Guatemala	FLACSO	Simona Yagenova Mario Castañeda
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Diana Cárdenas
Paraguay	Centro de Documentación de Estudios	Quintín Riquelme
Ecuador	CIUDAD	Mario Unda Hugo González
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Chile	ARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo
Brasil	LPP	Roberto Leher
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
México	UNAM	Massimo Modonesi Lucio Oliver
Panamá, El Salvador, Nicaragua Honduras y Costa Rica	CELA (Panamá)	Marco A. Gandásegui, h.
República Dominicana y Puerto Rico	Centro Juan Montalvo (Rep. Dominicana)	Mario Serrano Juan Luis Corporán
Venezuela	PROVEA	Marino Alvarado Marco Antonio Ponce
Costa Rica	IIS	Sindy Mora Solano

Costa Rica

Informe de coyuntura

Setiembre-octubre 2008

Sindy Mora Solano, Anthony García Marín
y Alejandro Alvarado Alcázar.

Durante los meses de setiembre y octubre se registran un total de 44 acciones colectivas de protesta social en Costa Rica. En este periodo, las acciones estuvieron protagonizadas por los trabajadores, las organizaciones ambientalistas, las organizaciones de ciudadanos vinculados a la oposición al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (TLC), y las cámaras empresariales a favor del mismo. También protagonizaron el conflicto los profesionales de la educación, las agrupaciones de productores nacionales, las mujeres y los indígenas. En el presente informe de coyuntura correspondiente a los meses de setiembre y octubre se da un resurgir de los conflictos por el TLC, en particular con lo que respecta al tema de propiedad intelectual. Los conflictos ambientales son centrales en las disputas por la acumulación y distribución de recursos.

Los principales conflictos presentados durante el bimestre setiembre/octubre de 2008 se clasifican de la siguiente forma:

1. Conflictos laborales
2. Conflictos ambientales
3. Conflictos por el TLC
4. Conflictos por el costo de los servicios y el alza del precio en los combustibles
5. Conflictos educativos
6. Conflictos vecinales
7. Conflictos productivos
8. Conflictos de género
9. Conflictos por la consulta en la toma de decisiones

1. Conflictos laborales

Tal y como se ha reseñado para otros balances de coyuntura, los conflictos laborales son un eje fundamental en las acciones colectivas de Costa Rica. Para el periodo setiembre/octubre se dan diversas acciones de este tipo, protagonizadas por trabajadores públicos, del sector educativo, del sector salud y del sector portuario.

A inicios de setiembre, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) anuncia la realización de una huelga el 8 de setiembre, como movimiento de presión para exigir al gobierno cancelar un pago adicional de 6.42% a los docentes bachilleres. Esta marcha se realiza el 8 de setiembre por las principales calles de San José para exigir un aumento salarial superior al aprobado por el Ministerio de Educación Pública (MEP).

En este mismo mes, once empleados del Hospital San Rafael, en la provincia de Alajuela, realizan un paro de labores como protesta por la falta de maquinaria con la que se realizan las labores de higiene y seguridad, en dicho hospital. Según dirigentes de la seccional de la Unión de Empleados de la Caja Costarricense del Seguro Social (UNDECA), el camión que transporta la ropa sucia y contaminada del hospital a la lavandería es el mismo que transporta la ropa limpia. De la misma forma, denuncian la escasez de las máquinas para lavar ropa.

El 16 de setiembre, el Sindicato de Técnicos, Auxiliares y Asistentes Administrativos de Farmacias de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), anuncia una huelga para el 18 de ese mismo mes, en todas las farmacias de la institución. El sindicato reclama la eliminación de un acuerdo con las autoridades de la CCSS, el cual considera que no mejoraba las condiciones laborales de sus afiliados.

Ya en el mes de octubre, el Sindicato de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (SINTRAJAP) rechaza la indemnización de \$80 millones (¢44.800 millones) ofrecida por el gobierno, a cambio de concesionar los puertos de Limón y Moín, de la provincia de Limón. En una reunión de apenas 20 minutos, unos 30 trabajadores portuarios se negaron a la propuesta estatal y alegaron que Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) no puede ceder la operación portuaria a una empresa privada.

Unos días después, el sindicato de muelleros de Limón y Moín pide el cierre de los puertos el viernes 31 de octubre para que sus agremiados discutan ese día la propuesta gubernamental sobre la concesión portuaria. Se trataría de una Asamblea General Extraordinaria a la que acudirían los 1.000 trabajadores sindicalizados de JAPDEVA.

2. Conflictos ambientales

Los nudos que estructuran los conflictos de carácter ambiental en estos dos meses son el desarrollo inmobiliario en la región costera del Pacífico costarricense, y la minería a cielo abierto en la Región Norte del país. A este tipo de acciones colectivas han sido convocados tanto diversas organizaciones ambientalistas, como organizaciones comunales y grupos de vecinos.

Como parte de este primer nudo, que refiere al desarrollo inmobiliario, se encuentran las declaraciones de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), cuyos representantes denuncian el levantamiento de residencias en el bosque de la fila costera del cantón de Osa, en la provincia de Puntarenas. Como respuesta a este planteamiento, el alcalde municipal comenta que las construcciones han venido a generar empleo en sectores donde la agricultura y la ganadería no están siendo rentables para los habitantes de las comunidades vecinas.

Respecto al nudo temático que refiere a la protesta contra la minería, a mediados del mes de octubre, la Sala IV frena la corta de cientos de árboles en la mina Crucitas, en Cutris de San Carlos, en la provincia de Alajuela. Dicha entidad pública acogió para su estudio un recurso de amparo interpuesto por un ciudadano de la localidad y la Asociación Norte por la Vida, quienes se oponen a la tala y la posterior construcción de

una mina de oro en la zona fronteriza con Nicaragua, del río San Juan. Mediante un decreto ejecutivo, la Administración Arias Sánchez (2006-2010) declaró de “conveniencia nacional” la tala de una zona protegida en Cutris, para el desarrollo del proyecto minero, a cargo de la empresa Industrias Infinito.

Este mismo conflicto ha generado otras acciones colectivas, con demandas diversas. Por una parte distintas organizaciones ambientalistas realizan una protesta en frente de las instalaciones del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) por el ya citado decreto ejecutivo. Los opositores a esta medida señalan los riesgos de la exploración minera, considerando que la zona deforestada es el habitat de la lapa verde. Señalan además que la exploración minera podría ser fuente de contaminación del Río San Juan, en el límite con Nicaragua. Por otra parte, un sector del campesinado y de los vecinos de Cutris, en San Carlos de Alajuela, participa en marchas por las calles de esa ciudad a favor de la minería. Las personas participantes indican que esta actividad traerá beneficios a todos los habitantes del lugar por lo que solicitan al gobierno no ceder las presiones de los ambientalistas.

3. Conflictos por el TLC

Los conflictos por la tramitación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (TLC) continúan teniendo un peso importante en la coyuntura política nacional. En este ámbito, los conflictos se pueden clasificar en dos niveles. El primero de ellos se encuentra relacionado con la oposición a la agenda complementaria del TLC, o por el contrario, con la solicitud de aprobación de la agenda complementaria. En el segundo nivel se encontrarían las iniciativas colectivas para darle una forma electoral a la oposición al TLC, de cara al proceso electoral nacional a realizarse en el 2010.

En el primer nivel anteriormente señalado se ubican las acciones colectivas protagonizadas por agrupaciones ambientalistas y diversas agrupaciones indígenas del país. Por ejemplo, en el mes de setiembre, la Red de Coordinación en Biodiversidad realiza una declaración pública para manifestar su oposición a la aprobación de la Ley de Semillas. De acuerdo a esta red de organizaciones sociales, la aprobación de esta ley, por parte de la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales de la Asamblea Legislativa, constituye una apuesta por la defensa de los intereses de las grandes transnacionales de semillas, frente a los derechos de los pequeños productores locales de semillas y de los agricultores nacionales. La Red de Coordinación en Biodiversidad critica la aprobación de la ley, ya que aprobación se dio sin las respectivas consultas a las organizaciones sociales. En la comisión legislativa en la que se aprobó este proyecto se realizaron consultas a las instituciones estatales y a las cámaras industriales, más no a los representantes de organizaciones campesinas o indígenas.

Por su parte, las agrupaciones indígenas del país solicitan, solicitan a la Administración Arias Sánchez ser consultadas sobre la reforma del artículo 78 de la Ley de Biodiversidad. Dicha reforma se haría como parte de la aprobación del proyecto de ley “Reforma y adición de varias normas que regulan materias relacionadas con propiedad intelectual”. Los indígenas solicitan ser consultados por parte del gobierno en relación a su posición en este proyecto de ley. La solicitud de las agrupaciones indígenas se da una

vez que la Sala IV emitió una resolución en donde se obliga a la Asamblea Legislativa a consultar la reforma de dicho artículo a las comunidades indígenas, al amparo del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Frente a esta solicitud se encuentra la petición de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), que solicita por medio de una carta a Ottón Solís, presidente del Partido Acción Ciudadana (PAC), y a los diputados de su fracción, que no atrasen el trámite de éste último proyecto de la agenda complementaria al TLC. Esta demanda se realiza debido al anuncio de la fracción legislativa del PAC, de que someterá a consulta ante la Sala Constitucional el proyecto de ley de reformas de varias normas que regulan materias relacionadas con la Propiedad Intelectual.

En el segundo nivel de acciones, se encuentra la propuesta de diversos dirigentes del Frente de Apoyo a la Lucha Nacional contra el TLC, con la finalidad de organizar una coalición electoral que permita la participación en las elecciones nacionales del 2010. A la actividad asisten distintas figuras vinculadas en el Movimiento del NO, nombre con el que se dio a conocer al movimiento de oposición al TLC. Sin embargo, la actividad es cuestionada por los diputados de oposición al gobierno, como Óscar López, del Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE) y Ottón Solís, del PAC. De la misma forma, diversas organizaciones que se opusieron al Tratado en el año 2007, han rechazado el llamado del Frente, apelando que no es la salida electoral la que debe darse al conflicto por el TLC.

4. Conflictos por el costo de los servicios y el alza del precio en los combustibles

Tanto en setiembre como en octubre se dan acciones colectivas de oposición a las alzas de las tarifas eléctricas solicitadas por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). De esta forma, las organizaciones sindicales, los industriales y los grupos de ciudadanos se oponen a las medidas, en audiencias realizadas en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). Para el caso de los sindicatos, éstos han señalado que los responsables de los desproporcionados aumentos en tarifas de electricidad, han sido los políticos que le negaron al ICE los recursos para invertir en generación eléctrica.

Por su parte, la Cámara de Industrias insta a las autoridades a tomar medidas urgentes para atender la “crisis del sector eléctrico”. Esta crisis obedece a un aumento constante en las tarifas eléctricas que se viene desarrollando desde principios del mes de abril. Esto sucede en momentos en que el ICE pretende subir un 46% a las tarifas. Los industriales piden al ICE financiar, mediante créditos, parte del combustible para generar electricidad, en vez de cargar ese costo directamente a los usuarios.

5. Conflictos educativos

En el mes de setiembre se registraron varios conflictos por la ausencia de recursos para la mejora de la infraestructura de los centros educativos. A inicios de este mes, estudiantes de 26 escuelas de la provincia de San José protestan frente a la Municipalidad de San José, debido a que desde hace un año los regidores impiden que ese municipio les gire un monto de ¢70 millones para mejorar la infraestructura de los centros educativos.

Un día después, las bandas musicales de algunas de las escuelas que pertenecen a la Junta de Educación de San José realizan un desfile por algunas de las calles de San José hasta llegar a la Municipalidad del cantón central de San José, para reclamar a los regidores el giro de los dineros aprobado hace más de dos años para reparar la infraestructura de algunos de los centros educativos. De acuerdo al presidente de la Junta de Educación de San José, de las 26 escuelas adscritas a esta Junta de Educación, hay 5 que tienen orden de cierre por parte del Ministerio de Salud (MINSA), estas son: la Escuela Costa Rica, la Escuela Omar Dengo, la Escuela Ramiro Aguilar, la Escuela García Flamenco y la Escuela Castro Madriz.

6. Conflictos vecinales

Los conflictos vecinales también se presentan en este bimestre. El mal estado de las carreteras y la mejora de la infraestructura son las demandas centrales de este tipo de conflicto. A principios del mes de setiembre, un grupo de vecinos de Los Guido, en el cantón de Desamparados en San José, realiza un bloqueo en los accesos a comunidades como Los Guido, La Capri, San Miguel, Higuito y Lomas, como forma de protesta por el mal estado de la carretera. Esta es la misma situación de los vecinos del cantón de Escazú en San José, quienes llevan dos años solicitando la reparación de una calle de solo 600 metros. Los 18 propietarios del condominio Bello Horizonte afirman haber enviado múltiples solicitudes al gobierno local para gestionar el arreglo de la calle que tiene trechos transitables y otros solo para carros de doble tracción.

En el mes de octubre se presentan protestas por la misma medida. Los vecinos del sector de Lindora, en el distrito de Pozos de Santa Ana solicitan la intervención de la Municipalidad de Santa Ana para reparar 200 metros de vía.

Por su parte, los vecinos de Progreso, Boruca, en la zona sur del país, exigen a las municipalidades de Buenos Aires y Osa construir un puente colgante sobre el río Térraba, ya que solo pueden cruzar en un bote de madera. Los vecinos afirman que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) ya hizo los diseños para construir un puente colgante que tendría 280 metros de longitud. No obstante, continúan a la espera de que los dos gobiernos locales pongan en marcha la obra.

7. Conflictos productivos

Varias organizaciones campesinas entre las que se encuentran UPANACIONAL, Corporación Hortícola, COOPEAGRI, CONARROZ, UPIAV y la Unión Nacional de Productores Agropecuarios anuncian manifestaciones, como medidas de protesta para que la Asamblea Legislativa coloque en primer lugar del orden de discusión, el proyecto de ley que agilizaría el registro de plaguicidas. Este proyecto les daría la posibilidad de adquirir plaguicidas genéricos, pues resultan más baratos.

8. Conflictos de género

Diputadas, ministras, magistradas y el personal de la Defensoría de los Habitantes (DH) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) visten una camiseta rosada como señal de protesta contra el fallo de la Sala IV, que declaró inconstitucionales los artículos 22 y 25 de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres. La camiseta rosada también hace alusión a la campaña internacional contra el cáncer de mama.

9. Conflictos por la consulta en la toma de decisiones

Los representantes de diversas organizaciones indígenas solicitan al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) la realización de una consulta a las comunidades del cantón de Buenos Aires, en la provincia de Puntarenas en torno al proyecto hidroeléctrico Diquís. Los integrantes de las comunidades indígenas de Térraba, Boruca y la zona de Curré se oponen a la propuesta de aprovechar el potencial hidroeléctrico de la zona de la cuenca del río Térraba, territorio ocupado por grupos indígenas. La realización de este proyecto implicaría el hundimiento de 6000 hectáreas de las cuales 600 pertenecen a los indígenas de Térraba, China Kichá y Salitre, lo que significaría una pérdida del patrimonio indígena.

Fuentes: Diarios La Nación y Diario Extra.

Otras fuentes: Semanario Universidad.